AUTO No. 200-6-23.0285 **FECHA** 24 MAR 2023

CORPORINOQUIA

"POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL"

La secretaria general de la corporación autónoma regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA, en uso de las facultades estatutarias, legales y en especial las conferidas mediante Resolución de la Dirección General N°400.36.22.1222 del 26 de agosto de 2022 y la resolución No. 100.41.14.0995 del 8 de julio de 2014, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 procede a decidir lo que en derecho corresponde, de acuerdo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Que por medio de queja impuesta en la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea VITAL-N060000000000170310, radicada en Corporinoquia con el NYO.2022-15324 del 31 de octubre de 2022, de manera anónima, se pone en conocimiento de esta entidad la infracción ambiental realizada presuntamente por el señor Oscar Camargo Sánchez identificado con cedula de ciudadanía No. 74.752.230, consistente en: *"Tala indiscriminada que se está desarrollando en centro poblado de la vereda únete donde el señor Osear Camargo ha practicedo actividades de tala de manera recurrente afectando nacederos de agua debilitando la estabilidad de la montaña y periudicando a la comunidad en general que se abastece del recurso hídrico".*

Que mediante Indagación Preliminar aperturada mediante Auto No. 500.13.1.22-533 del 16 de noviembre de 2022, CORPORINOQUIA ordena la práctica de una visita técnica al lugar de los hechos-descritos por parte del interesado, a fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar la veracidad y establecer si esta es constitutiva de una infracción ambiental.

Que el día diecisiete (17) de noviembre de 2022, profesionales de la Corporación se trasladaron al lugar de los hechos y realizaron la visita técnica ordenada.

Que se emitió el Concepto Técnico No. 500.8.2-22-1905 de fecha 28 de diciembre de 2022, que evidencia el resultado de la visita técnica ordenada mediante Auto No. 500.13.1.22-569 del 05 de diciembre de 2022

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL

De acuerdo con el informe técnico No. 500.8.2-22-1905 de fecha 28 de diciembre de 2022, emanado de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental se realizó visita técnica de verificación al predio denominado San Andrés ubicado en la vereda Unete del Municipio de Aguazul, cuyas coordenadas geográficas se observan en la página dos (02) del Concepto técnico, del cual se destaca lo siguiente:

INFORME TÉCNICO DE INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL

(...)

3.2. Descripción general de la visita

Al llegar al punto exacto de la afectación, se evidenció un área en proceso de tala, donde la vegetación existente a la fecha de la visita corresponde a la faja protectora de un nacedero de agua, en cuanto a la afectación ambiental se encontraron individuos arbóreos apeados y acopiados en trozas junto a los troncos o árboles cercanos, estos presentaban un CAP que oscila entre los 35 y 45 cm y alturas totales de 5 a 7 m .aproximadamente. Se logró identificar las especies de árboles talados, entre ellas se encontraron Petezamuro (Cordia viridis), Arrayán (Myrcia subsessilis), Acacia (Acacia mangium) y Palma corozo (Acrocomia aculeata); los anteriores hechos se efectuaron sobre un área de aproximadamente 0.5 hectáreas

(...)

Es importante aclarar, que para este caso según lo informado por la comunidad el señor Oscar Camargo Sánchez identificado con cedula de ciudadanía N°. 74.752.230, es el presunto infractor, quien realizó y/o ordeno la tala en el área afectada en el predio denominado San Andrés, con Número predial: 85010000000000090065000000000, ubicado en la vereda Unete, jurisdicción del municipio de Aguazul - Casanare, en un área de 389.744 m2 (IGAC, 2022), talando individuos arbóreos sin la debida autorización de aprovechamiento forestal de la Autoridad Ambiental competente, tal y como lo establece la normatividad

ambiental vigente del Decreto 1076 del 2015, en su Artículo 2.2.1.1. 7.1, el cual determina que: "Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar ante la Corporación competente una solicitud de permiso".

(...)

4. Concepto Técnico

De acuerdo con la información recolectada en la visita técnica el día 17 de noviembre de 2022, en atención a la Indagación Preliminar Nº 500.13.1.22.533 del 16 de noviembre de 2022 y lo evaluado en el proceso de su realización, se determinó como presunto infractor al señor Oscar Camargo Sánchez identificado con cedula de ciudadanía Nº. 74.752.230, por la tala indiscriminada en un área de 0.5 hectáreas de vegetación perteneciente a la faja protectora de la cuenca media del Río Unete y nacederos de agua presentes en la zona, -en donde apearon individuos arbóreos, los cuales presentaban un CAP que oscilaba entre los 35 y 45 cm y alturas totales de 5 a 7 m aproximadamente, hechos efectuados sobre una cobertura de (3. 1. 4) Bosque .de galería y ripario, en el predio denominado como San Andrés, vereda Unete, jurisdicción del municipio de Aguazul, departamento de Casanare. Por ende, se deter mina que la actividad realizada por el presunto infractor genera impactos negativos en los componentes flora, suelo y paisajismo del área intervenida, localizada en las coordenadas geográficas Datum WGS84 Latitud N 5°12'20.78" - Longitud W 72°35'57.60", también, que para este caso el señor Osear Camargo Sánchez, no tuvo en cuenta los lineamientos técnicos definidos en la Resolución Nº 532 de 2005.

Por otra parte, según lo reglamentado en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, (metodología para la tasación de multas, Numeral 1°, Artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sóstenible), se realizó la valoración por "Afectación Ambiental", resolviéndose que en cuanto al Beneficio Ilícito, en este caso no aplica los servicios de evaluación para la respectiva Autorización de Aprovechamiento Forestal establecida en la Resolución Nº 500.36.22.0586 del 09 de mayo de 2022, no se tienen en cuenta los Ingresos Directos puesto que los individuos arbóreos apeados se encontraron en el área intervenida, Respecto al Grado de Afectación se pondera como "Leve" (14), Factor de Temporalidad hace referencia a uno (1), Capacidad de Detección de la Conducta se pondera como "baja", Circunstancias Atenuantes y Agravantes: en este caso no se encontraron circunstancias atenuantes, pero si agravantes por atentar contra recursos naturales ubicados en área protegidas, o declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición, ya que se realizó tala en un área de 0.5 hectáreas de bosque perteneciente a la faja protectora de la cuenca media del Río Unete y nacederos de agua presentes en la zona, y Obtener provecho económico para sí o para un tercero...".

III. IDENTIFICACION PRESUNTO RESPONSABLE

Una vez analizada la información contenida en el informe técnico No. 500.8.2-22.1905 de fecha 28 de diciembre de 2022 emanado de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental, se determina como presunto infractor al señor OSCAR CAMARGO SÁNCHEZ, identificado con C.C. No. 74.752.230.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Que la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada por la Conferencia de las Naciones Unidas del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, proclamó una serie de principios, entre los cuales se encuentran:

PRINCIPIO 2

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y **la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados** o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

PRINCIPIO 11

Los Estados deberán **promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente.** Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.

PRINCIPIO 15

Con el fin de proteger el medio ambiente, **los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades**. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Que, en armonía con el anterior instrumento internacional, la Constitución Política de Colombia, denominada Constitución Ecológica[1] por la Corte Constitucional, en su desarrollo ha establecido los lineamientos en la política ambiental del país, por ejemplo en su artículo 8° señala que *"es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y **naturales** de la nación"*.

Que en el artículo 49 establece como servicio público a cargo del Estado el saneamiento ambiental, además, el artículo 79 advierte, entre los derechos colectivos, la garantía que tiene toda persona de gozar de un ambiente sano.

En ese mismo sentido el artículo 58 le otorga a la propiedad privada la función ecológica inherente y el artículo 80 advierte sobre la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y con ello garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, la administración deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, **imponer las sanciones legales** y **exigir la reparación de los daños causados**.

El artículo 95 de la Constitución señala que uno de los deberes del ciudadano es proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que, en complemento del marco constitucional, existía en la legislación nacional el Decreto 2811 de 1974 -Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente - que en su artículo 1° otorga al ambiente de patrimonio común y advierte que: *"el Estado y **los particulares deben participar en su preservación y manejo**, que son de utilidad pública e interés social"*.

A su vez la Ley 99 de 1993 asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales las funciones señaladas en los numerales 2 y 17 del artículo 31, que a la letra dicen:

***Artículo 31.** Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:*

> *2. Ejercer la función de **máxima autoridad ambiental** en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Medio Ambiente.*
> *(...)*
> *17. **Imponer y ejecutar a prevención** y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, **las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley**, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.*

Que, entre otros aspectos, el Título XII ibídem de esa misma normatividad, señala el tipo de medidas preventivas y las sanciones a imponer al infractor de normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables; de igual forma, precisa que la imposición de multas no exime al infractor de la ejecución de obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental responsable del control, ni la obligación de restaurar el medio ambiente.

Que especialmente la Ley 1333 de 2009, a través de la cual se señala el procedimiento sancionatorio ambiental, en su artículo 1° advierte que la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental está a cargo del Estado a través del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los

[1] Corte Constitucional – M.P. Alejandro Martínez Caballero – sentencia del 17 de junio de 1992 – Expediente T-411 de 1992.

grandes centros urbanos, entre otras. Que en los términos del parágrafo de ese artículo en concordancia con el parágrafo 1° del artículo 5°, en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo que dará lugar a la imposición de las medidas preventivas correspondientes, además, advierte que el infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción que sobre él recae, para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Que en el artículo 5° ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables – Decreto Ley 2811 de 1974-, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en **las demás disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente**; igualmente es constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que, en todo caso, las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio ambiental.

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece que el proceso sancionatorio se iniciará mediante acto administrativo motivado y se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA SECRETARÍA GENERAL

Que de conformidad con el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, la Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental la ejerce el Estado, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, entre otras.

Que, en los términos del Parágrafo del mentado Artículo, en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El presunto infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, mediante la cual se establece el régimen sancionatorio ambiental, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, el Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; igualmente es constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que en consecuencia serán sujetos de imposición de las medidas sancionatorias, aquellas personas que actúen conforme lo señala el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

Que las sanciones solamente podrán ser impuestas por la Autoridad Ambiental competente, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio ambiental, en los términos de la Ley 1333 de 2009.

Que es obligación de esta Corporación, por mandato superior, mediante el cumplimiento de las funciones asignadas legalmente y en el ámbito de su competencia, hacer efectivos los preceptos constitucionales y legales dentro del marco del estado social de derecho y de conformidad con el concepto técnico No. 500.8.2.22-1905 de fecha 28 de diciembre de 2022, donde personal adscrito a la Subdirección de Control y Calidad Ambiental realizó el día 17 de noviembre de 2022, visita técnica de verificación al predio denominado San Andrés ubicado en la vereda Unete del Municipio de Aguazul, encontrando la tala indiscriminada en un área de 0.5 hectáreas de vegetación pertenecientes a la faja protectora de la cuenca media del río Unete y nacederos de agua presentes en la zona, sin cumplir con la normatividad ambiental vigente.

Así las cosas, y de acuerdo con el concepto técnico No. 500.8.2.22-1905 de fecha 28 de diciembre de 2022 que reposa en el presente Expediente sancionatorio, este despacho encuentra merito

suficiente para iniciar investigación sancionatoria ambiental en contra del señor OSCAR CAMARGO SANCHEZ.

Que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, se dispondrá la publicación del presente acto administrativo, con el fin de garantizar la intervención de los ciudadanos.

En virtud de lo establecido en el artículo 22 de la ley 1333 de 2009, esta Corporación está facultada para realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.

Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA,

DISPONE

PRIMERO: Iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en contra del señor **OSCAR CAMARGO SÁNCHEZ,** identificado con C.C. No. 74.752.230, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo

SEGUNDO: En concordancia al artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 se podrá de manera oficiosa realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental y completar los elementos materiales de prueba probatorios.

TERCERO: Téngase el informe técnico No. 500.8.2.22-1905 de fecha 28 de diciembre de 2022, como parte integral de la presente actuación administrativa, la cual quedara a disposición del investigado, para que ejerza el derecho de contradicción y defensa.

CUARTO: Notificar el contenido de esta decisión al señor **OSCAR CAMARGO SÁNCHEZ**, identificado con C.C. No. 74.752.230, o a quien de forma expresa autoricen, conforme las reglas previstas en los Artículos 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo: De conformidad con el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 1437 de 2011, el presunto infractor podrá remitir sus escritos, al correo electrónico atencionusuarios@corporinoquia.gov.co.

QUINTO: Por secretaría, comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios para lo de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, enviándole copia de esta providencia.

SEXTO: Ordenar a la Oficina de Sistemas de la Corporación, publicar el presente acto administrativo en la página web de CORPORINOQUIA de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y una vez surtido este trámite deberá allegar al expediente copia de la publicación que evidencie su cumplimiento.

SEPTIMO: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste conforme lo establecen el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009; para efectos del trámite de las peticiones de intervención aplicar lo señalado por el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

OCTAVO: Contra el presente acto no procede recurso alguno, de conformidad con lo señalado por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIANA MUÑOZ PAREDES
Secretaria General

Proyectó: Indira Medina Carreño - Abogada - SG/
C. P. S. P. No. 120-12-13.23-269 del 21 de febrero de 2023